

cierto que D. Antonio Cornejo faltó al cumplimiento de sus deberes como Gefe superior de Hacienda, verificando ese pago en especies y no en dinero, tal falta no constituye un delito que merezca ser averiguado en formal proceso y castigado con la severidad que determinan las leyes. Que dicha falta habria quedado reparada con alguna seria amonestacion que su superior inmediato le hubiere hecho. Que menos lugar pueden tener el proceso y la pena habiendo sido destituido de su encargo de Gefe Superior de Hacienda,

Por estas consideraciones y con apoyo de los mismos fundamentos legales en que descanza el auto de 11 de Diciembre citado, se resuelve: Primero: Se confirma dicho auto el cual manda sobreseer en el proceso que se le instruia á D. Antonio Cornejo, por los motivos que ya quedan referidos. Segundo: Notifiquese y ejecútase, librando la Orden correspondiente. Tercero: Dese cuenta con ese proceso á la Suprema Corte de Justicia, y remítase copia de la presente sentencia al Semanario Judicial.—*Juan Robles Martínez*.—*Tomás Bravos*, secretario.

Pedimento del C. Procurador General de la Nacion.

El Procurador General de la Nacion dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Aguascalientes, se instruyó proceso contra el C. Antonio Cornejo, Gefe Superior de Hacienda de dicho Estado, por abuso en el ejercicio de sus funciones. El delito imputado á Cornejo consistia en haber hecho que varios pensionistas del Erario Federal, cuyos pagos estaban consignados á aquella Gefatura, recibiesen parte de sus haberes en efectos ministrados en la casa de comercio de D. Saturnino Gonzalez.

Cornejo confesó el hecho, explicando que habia procedido con acuerdo y consentimiento de los interesados, y en atencion á que

D. Saturnino Gonzalez, deudor de cierta cantidad, manifestó no tener dinero para cubrirla, pero que lo haria con efectos, los cuales aceptaron espontáneamente los interesados.

El Juzgado de Distrito, despues de sustanciar el proceso hasta su conclusion, dictó en lugar de sentencia definitiva un auto de sobrescimiento, fundándose en las leyes 4ª, tit. 17, L. 11 de la Recop., razon de la 2ª, tit. 16 del mismo Código, y espíritu de la 26, tit. 1ª, Part. 7.

Revisado este auto por el Tribunal de Circuito de Guadalajara, lo confirmó en todas sus partes y por sus propios legales fundamentos. Habiendo pues causado ejecutoria, el Procurador General ya solo puede ocuparse de la revision del proceso; y como encuentra que los procedimientos han sido arreglados á las leyes, pide se dé por revisado. México, Junio 5 de 1873.—*L. Guzman*.

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 6 de 1873. Como parece al C. Procurador General.—*José M. Iglesias*.—*Pedro Ogazon*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. Auza*.—*S. Guzman*.—*Enrique Landa*, oficial mayor

Es copia. México, Julio 4 de 1873. *Alejo Gomez Equiarte*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por Petrona Sanchez en representacion de su esposo Hilario Hernandez, contra la consignacion de este al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que segun el informe producido por el C. Gefe político de

este Partido acerca del acto reclamado por Petrona Sanchez, á favor de su esposo Hilario Hernandez, aquella autoridad procedió con manifiesta equivocacion, al juzgar y condenar á este como salteador y vago por las leyes de salteadores y vagos en que dice se fundó; por que las del primer delito ni de muy lejos vienen al caso, cuando lo que pudiera rozarse con él de todo lo que dice el informe, es que el C. Nicomedes Ramon, acusó á Hilario Hernandez de haberle robado en el campo un caballo y una res, lo que aun justificado, no sería bastante para calificar á Hernandez de salteador, cual define á los salteadores el artículo octavo de la ley de 3 de Mayo del presente año, sino como reo de hurto definido en el artículo 50 de la ley de 5 de Enero de 1857, que es por la que debió juzgarse. Dice el C. Gefe político, que estrechado á condenar á Hernandez como salteador por la ley primera citada, le pareció menos duro consignarlo como vago al servicio de las armas conforme á la segunda; mas lejos de que aquella ley le hubiera puesto en tal estrechéz, el artículo noveno de ella misma le prohíbe aplicarla aun á los rebeldes contra los poderes constituidos cuando no tengan cometido plagio alguno; y si por la de 5 de Enero de 1857 deben ser destinados los vagos al servicio de las armas, es previa la calificación de serlo, y su aplicacion por el Tribunal que establece en su artículo 91 mediante el juicio reglamentado por el 93 y siguientes, no por una sola autoridad ó persona, en el brevísimo tiempo en que todo se hizo, sin lugar á defensa de ninguna clase, sobrecargando esa pena con la de destierro que hizo ejecutar en el acto, y botando á la muger y los hijos á la calle.

Por todo lo cual, y con fundamento de la primera parte del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, el Ministerio fiscal concluye pidiendo á V. se sirva declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Hilario Hernandez contra el acto del C. Gefe político de este Partido, en vir-

tud del cual se le condenó al servicio de las armas y embarcó para Veracruz, por haberse violado con esto en su persona las garantías que otorgan la primera parte del artículo quinto, la segunda del 14 y todo el 20 de la Constitucion de la República.

San Juan Bautista, 16 de Julio de 1873.
—*Lic. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Julio 18 de 1873.—*Gabriel Sosa.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Julio 18 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido por Petrona Sanchez á nombre de su esposo Hilario Hernandez, contra la providencia del C. Gefe político de este Partido, que consignó á este individuo al servicio de las armas en el ejército permanente, teniendo presente el informe de la autoridad responsable, así como el pedimento fiscal.

Considerando: que el mismo informe citado muestra muy á las claras la ninguna legalidad del procedimiento, porque si fuese cierto que Hernandez tomó las armas en la sedicion pasada, su responsabilidad quedó cancelada con la ley general de amnistía, y aun cuando así no fuese, no hubiera podido exigírsele sino mediante un juicio al cual son autoridades extrañas los ciudadanos Gefes políticos, segun la ley de 6 de Diciembre de 1856.

Que lo propio sucede respecto de los hechos de robo y vagancia que supone la autoridad causante, estando estos casos comprendidos en las leyes de 5 de Enero de 1857, por la cual ni por otra alguna se asignan á los Gefes políticos atribuciones judiciales de ninguna clase respecto de dichos hechos y mucho menos bajo una forma discrecional.

Que aun cuando la consideracion de los precedentes criminosos supuestos por aquella autoridad debiesen en alguna manera influir en la determinacion del asunto, no

se ha presentado justificación alguna por cuya virtud puedan darse como sentados.

Que por la misma razón no puede darse importancia alguna á la última consideración que propone el funcionario informante, pretendiendo la exclusión del amparo como caso comprendido en el artículo octavo de la ley de la materia de cuya calidad está evidentemente muy remoto; y que por lo tanto el procedimiento ejercido por el expresado Jefe político, contra el referido Hilario Hernandez es claramente inconstitucional, viola abiertamente los principios consignados en los arts. 14, 16 y 21 de la Carta fundamental de la Nación, y es caso comprendido en el artículo primero, fracción primera de la ley de 20 de Enero de 1869, no debiendo desestimarse las circunstancias agravantes de haber sido el ofendido arrastrado fuera del Estado, y dejando en el desamparo y horfandad una mujer en los últimos días de la gestación y cargada con el cuidado de dos hijos en tierna edad, con los cuales se ha presentado ante este Juzgado.

Por tales consideraciones y legales fundamentos, el Tribunal definitivamente pronuncia: Primero: La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Hilario Hernandez contra la providencia del C. Jefe político, que lo condenó y consignó al servicio de las armas. Segundo: Cúmplase lo prevenido en el artículo 13 de la ley citada, y las demás prevenciones legales, haciéndose constar que se ha usado del presente papel, por la notoria pobreza de la interesada. La proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado y firma conmigo su escribano que doy fé.—*L. Correa*.—Ante mí.—*Gabriel Sosa*.

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Julio 18 de 1873.—*Gabriel Sosa*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México Agosto 8 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por Doña Petrona Sanchez, en representación de su esposo Hilario Hernandez, contra el Jefe político del partido del centro que lo consignó al servicio de las armas, y considerando; que en el expediente aparece que se han vulnerado en la persona de Hernandez las garantías á que se refieren los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución general, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 18 del mes próximo pasado, por el Juez de Distrito de Tabasco que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Hilario Hernandez, contra la providencia del Jefe político que lo condenó y consignó al servicio de las armas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de la sentencia de esta Suprema Corte para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Auza*.—*S. Guzmán*.—*L. Velásquez*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, 28 de Agosto de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.